

Venezuela: los 150 días del interinato

Antonio De La Cruz

Director Ejecutivo

9/Jun/2026

Hay momentos en que los hechos se adelantan al lenguaje. Venezuela vive uno de esos instantes ambiguos en los que la realidad ya cambió, pero la política todavía no encuentra las palabras para nombrar ese cambio sin mentirse a sí misma.

Han pasado cinco meses desde la salida de Nicolás Maduro del poder. Cinco meses desde que desapareció la figura en torno a la cual giró los últimos 13 años la vida política venezolana. Y, sin embargo, la pregunta que recorre Caracas, Washington y las capitales europeas no es si hubo cambio. El cambio ocurrió. La duda es otra, mucho más incómoda: ¿qué tipo de cambio fue?

Porque lo que no ha ocurrido aún es la transición.

Durante años, buena parte del debate sobre Venezuela descansó en una simplificación tan útil como engañosa: el régimen era Maduro y Maduro era el régimen. Bastaría retirar al hombre para que se derrumbara el sistema, como un decorado sobrecargado. La realidad ha demostrado lo contrario.

Maduro salió del tablero. El tablero permaneció.

Esa es la primera lección de estos 150 días. La estructura política construida por el chavismomadurismo ha sobrevivido a la desaparición del heredero de Chávez. No porque conserve intacta su fuerza, sino porque las estructuras de poder rara vez caen al mismo tiempo que los hombres que las encarnan. Los sistemas se adaptan. Cambian de rostro para preservar funciones. Sustituyen protagonistas para conservar posiciones.

Eso es lo que se observa hoy en Venezuela.

No estamos ante una restauración democrática. Tampoco ante la simple continuidad del viejo régimen. El país habita una zona intermedia: el pasado ya no gobierna plenamente, pero el futuro todavía no consigue imponerse. Los griegos llamaban a estos intervalos interregno. Gramsci los definió como el tiempo en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.

Pocas figuras representan mejor esa condición que Delcy Rodríguez. Durante años ha sido una de las arquitectas de la proyección internacional del régimen madurista. Hoy ejerce, de facto, como administradora provisional de un sistema que intenta reorganizarse tras perder a su centro de gravedad.

Su función no es fundar un nuevo orden, sino evitar que el viejo colapse de forma violenta. Es una diferencia decisiva. Los administradores gestionan la inercia del presente; los líderes construyen el futuro. Y Venezuela, por ahora, sigue esperando a estos últimos.

Mientras tanto, Washington ha impuesto su propia lógica. Quienes miran el proceso solo desde la perspectiva de la democratización incurren en un error: suponer que la prioridad estadounidense consiste en convocar elecciones lo antes posible. La conducta de la administración Trump en estos cinco meses sugiere otra secuencia: primero estabilizar, después recuperar, finalmente democratizar.

El orden de los factores no es inocente. Estados Unidos ha dejado de ver Venezuela exclusivamente como un problema ideológico. La percibe como una cuestión de seguridad hemisférica. El objetivo inmediato no es producir una democracia ejemplar, sino evitar el colapso institucional, contener nuevas olas migratorias, limitar redes criminales transnacionales y reducir la influencia de potencias como China, Rusia e Irán.

En esa lógica, la estabilidad precede a la legitimidad.

Pero ahí se abre la gran contradicción. La estabilidad puede administrar el tiempo; no puede sustituir la legitimidad. Puede aplazar la crisis; no puede resolverla.

El terreno donde esta tensión se hace más visible es el petróleo. Durante años se dijo que el petróleo venezolano era el problema. Hoy vuelve a presentarse como parte de la solución. Pero ya no es solo una mercancía: se ha convertido en herramienta geopolítica.

La producción aumenta. Las exportaciones crecen. Algunas empresas internacionales regresan con cautela. Sin embargo, las grandes inversiones —las que transforman la estructura de una industria— siguen en suspenso. No por falta de reservas ni de capacidad técnica, sino por una razón elemental: nadie compromete miles de millones de dólares en un país cuya arquitectura política sigue indefinida.

Una petrolera puede elevar producción con flujo de caja operativo, reparar equipos, reactivar pozos, optimizar operaciones. Pero cuando se trata de comprometer capital a veinte o treinta años, las preguntas son políticas: ¿quién gobernará Venezuela dentro de cinco años? ¿se respetarán los contratos? ¿habrá estabilidad regulatoria? ¿existirá una legitimidad reconocida dentro y fuera del país?

Hoy ninguna de esas preguntas tiene respuesta convincente.

Por eso el repunte petrolero convive con una cautela financiera persistente. La recuperación avanza. La confianza, no.

La sociedad venezolana, mientras tanto, se mueve a otro ritmo. Para entender el momento actual, conviene imaginar tres relojes funcionando a la vez.

El primero es el del aparato heredado del chavismo, cuya prioridad es sobrevivir. El segundo es el de Washington, que aspira a estabilizar. El tercero es el de los ciudadanos, que exigen democratizar. Los tres marcan horas distintas.

La gente ya dio por descontado el cambio. La caída de Maduro pertenece al pasado. La conversación cotidiana gira ahora en torno a otra pregunta: ¿cuándo habrá elecciones? La transición existe con más fuerza en la imaginación colectiva que en las instituciones encargadas de hacerla realidad.

Esa brecha genera tensión. Toda transición es, en el fondo, un conflicto de velocidades. Los ciudadanos se mueven más rápido que las instituciones. Las instituciones, más rápido que las burocracias. Y las burocracias, más rápido que los intereses creados que intentan preservar privilegios. Venezuela no escapa a esta regla.

En este contexto adquiere relieve el llamado Manifiesto de Panamá, impulsado por las fuerzas democráticas encabezadas por María Corina Machado. Su importancia no reside solo en el consenso que intenta articular, sino en algo más ambicioso: es el primer intento serio de diseñar la arquitectura del día después.

Las transiciones no se ganan únicamente acumulando legitimidad moral. Requieren organización, instituciones, acuerdos, capacidad administrativa y una visión concreta de gobierno. En otras palabras, exigen demostrar que existe una alternativa preparada para ejercer el poder, no solo para denunciar a quienes lo ejercieron.

Ese sigue siendo el desafío central.

La pregunta decisiva para Venezuela ya no es quién abandonó el poder ni cuántos barriles de petróleo puede producir, ni siquiera cuánto respaldo internacional puede acumular el nuevo esquema. La cuestión de fondo es otra: si el país será capaz de transformar estabilidad en legitimidad.

Esa es la prueba que define todas las transiciones históricas.

Cinco meses después de la salida de Maduro, Venezuela parece haber completado apenas la primera etapa de ese recorrido. La estabilización ha comenzado. La recuperación busca abrirse paso. Pero la legitimidad continúa a la espera.

Mientras siga siendo así, el país seguirá habitando esa tierra de nadie donde el pasado ya no gobierna plenamente, pero el futuro todavía no ha llegado. Ese espacio entre una caída y una elección. Entre una administración provisional y una democracia pendiente. Entre la promesa del cambio y la construcción efectiva de una nueva república.

La historia ha demostrado que estos momentos pueden prolongarse más de lo que imaginan sus protagonistas. Pero también ha demostrado algo más: que, tarde o temprano, los relojes terminan por sincronizarse.

Y cuando eso ocurre, los países cambian para siempre.